



RESEÑA LEGISLATIVA

ISSN 0717-0416

Nº 1326

6 de Abril de 2018

MODIFICACIONES AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

BOLETÍN 11656-07

RESEÑA LEGISLATIVA es una publicación de
LIBERTAD Y DESARROLLO
DIRECTOR RESPONSABLE: Luis Larraín A.
EDITOR: Pablo Kangiser G.
DIRECCIÓN: Alcántara 498, Las Condes, Santiago,
Chile.



RESEÑA LEGISLATIVA

Nº 1326

6 DE ABRIL DE 2018

ÍNDICE

MODIFICACIONES AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

BOLETÍN 11656-07

OPINIÓN EJECUTIVA	4
CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY	5
COMENTARIOS DE MÉRITO	6
TEXTO DEL PROYECTO DE LEY	12

MODIFICACIONES AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL


DESCRIPCIÓN BOLETÍN 11656-07

REFERENCIA	Modifica el Capítulo VIII de la Constitución Política de la República, relativo al Tribunal Constitucional
INICIATIVA	Moción de los Senadores Sras. Goic y Muñoz, y Sres. Harboe, Huechumilla e Insulza
ORIGEN	Senado
COMISIÓN	De Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento
INGRESO	4 de abril de 2018
ARTICULADO	Tres artículos que modifican, respectivamente, los artículos 92, 93 y 94

OPINIÓN EJECUTIVA DE LYD

La base del constitucionalismo y de un Estado de derecho democrático es la existencia de límites al Estado y a la decisión mayoritaria. Sea sobre la base de reglas constitucionales, sea sobre la base de la protección de derechos fundamentales o sea incluso sobre la base de principios constitucionales, las constituciones globalmente han sido fórmulas de limitar la decisión mayoritaria y generar un espacio protegido. Existiendo consenso en lo anterior, la crítica en Chile se ha centrado en el Tribunal Constitucional (TC), es decir, en el órgano jurisdiccional que concentra en sus atribuciones el control de constitucionalidad. El cuestionamiento no es exclusivamente chileno, pero llama la atención que aquí en nuestro país se ha tomado parte del debate político.

Aun cuando pueden existir aspectos susceptibles de modificación y mejor regulación de algunas materias relativas al Tribunal Constitucional, especialmente, en materia de nombramiento de sus miembros, y a pesar de que el proyecto de reforma constitucional se aboca a modificar el nombramiento de sus integrantes, contiene diversas otras materias, que son en su mayoría contrarias al control de índole jurídico que ejerce el TC, y a una sana organización del Tribunal; su relación, además, con el poder legislativo lo deja supeditado a lo que resuelva el Congreso Nacional sobre la constitucionalidad de los proyectos de ley, mediante una votación política. Tanta es la supeditación que el proyecto supone por parte del Tribunal Constitucional al Congreso Nacional que resulta contradictorio, de alguna manera, que el proyecto proponga como requisito para ser elegible como miembro del TC el ser doctor en derecho.

La supresión que se propone de diversas atribuciones del TC, sumado a los altos quórum para someter un asunto a su examen y en otros casos para que éste pueda declarar la inconstitucionalidad de una norma deben ponderarse de cara a la certeza jurídica, la que puede verse ciertamente afectada en la aplicación posterior y en concreto de esas normas, generando riesgos de litigios posteriores, y un aumento en los costos que deberán asumir las personas para hacer frente a estas situaciones uno a uno en cada caso 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

Designación de los miembros del TC. Se establece un nuevo sistema de elección de los miembros del Tribunal Constitucional: terna de la Corte Suprema, elección de un nombre de la terna por el Presidente de la República, quien lo propondrá a ambas cámaras del Congreso (ante las cuales el candidato propuesto deberá efectuar una exposición); se requerirán de 2/3 de sus miembros en ejercicio, en cada cámara, para aprobarlo.

Se aumentan las exigencias académicas y profesionales para postular a miembro del Tribunal: doctor en ciencias jurídicas, haberse destacado en actividades profesionales, universitarias o públicas y no tener impedimento para el cargo.

Remoción. Se incorpora una causal de remoción de los miembros del TC, a proposición del Presidente de la República o de cualquiera de las cámaras, por 2/3 de sus miembros; resuelve la remoción el propio Tribunal Constitucional, por mayoría absoluta de sus miembros. El reemplazante ocupará el cargo por el tiempo que restare al removido, y podrá ser, excepcionalmente, reelegido para un nuevo período de 9 años, si hubiere servido el cargo por un período menor a cinco años.

Se hacen aplicable a los miembros del TC las responsabilidades penales por cohecho, prevaricación, denegación de justicia y por otras causales hoy día aplicables a la generalidad de los jueces del país.

Recurso de Inaplicabilidad. Se elimina de la competencia del TC el recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, así como las contiendas de constitucionalidad surgidas respecto de los proyectos de reforma constitucional y de los tratados internacionales.

Control preventivo. El control previo se ejercerá exclusivamente respecto de normas de rango orgánico constitucional, que hubieren sido aprobadas expresamente con el quórum de 4/7 de diputados y senadores en ejercicio. En caso que el TC declare alguna de estas normas como inconstitucional (para lo cual requerirá un acuerdo por 4/5 de sus integrantes), la cámara de origen podrá insistir en la constitucionalidad por 2/3 de sus miembros en ejercicio; si insistiere, remitirá la norma a la cámara revisora y si también fuera aprobada con el mismo quórum, se remitirá al Ejecutivo para su promulgación ■■■■

IV. COMENTARIOS DE MÉRITO EN GENERAL

CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD

Toda la teoría constitucional así como la existencia misma del Tribunal, no se explica sino en función de la “supremacía constitucional”. En efecto, a partir de la “pirámide normativa” de Kelsen, se entiende que existe un ordenamiento jurídico en cuya cúspide se encuentra la Constitución, luego siguen las normas legales y finalmente los decretos, reglamentos y actos administrativos. Es un ordenamiento porque las normas de mayor jerarquía priman, en cuanto a su aplicación, sobre las de nivel inferior. Obviamente, un decreto no puede modificar una ley y una ley no puede modificar a la Constitución; ésta solo se modifica mediante proyectos sometidos a un quórum especial (y más alto) de aprobación; anteriormente en Chile, se requería además un congreso pleno para modificar la Constitución. Es así que actualmente los trámites de una reforma constitucional son los mismos que los de una ley (incluyendo la posibilidad de constituir comisiones mixtas, que anteriormente no estaban autorizadas), de modo que el nivel normativo, superior o inferior, está prácticamente determinado por el quórum requerido para aprobar las normas jurídicas dependiendo de su nivel dentro del ordenamiento.

Conviene recordar que en nuestro medio existen normas que requieren de la aprobación de los 2/3 de diputados y senadores en ejercicio (para los principales capítulos de la CPR); normas de 3/5, que es la regla general para la modificación de la Constitución Política; luego vienen las normas de 4/7 u orgánicas constitucionales sobre materias

que, específicamente, la Constitución exige ese quórum; a continuación las de quórum calificado, es decir, las que requieren ser aprobadas por la mayoría absoluta de diputados y senadores en ejercicio, y finalmente, la ley común u ordinaria, que es la única que se aprueba por la mayoría de los diputados y senadores presente en la sala al momento de la votación.

Este ordenamiento jurídico, sin embargo, podría dar lugar a un examen teórico complejo, si se postulara que, por ejemplo, al interior de la Constitución, las normas de 2/3 deberían prevalecer sobre las de 3/5; dado que éstas disposiciones se contienen en capítulos diversos, no debería producirse colisión entre ellas; pero ¿una ley común u ordinaria podría contravenir lo dispuesto por una ley orgánica constitucional? Ciertamente que no; una norma de rango orgánico constitucional nace de una exigencia constitucional, pues la Constitución dispone que ciertas materias sean reguladas por normas de rango especial; así, una ley común u ordinaria que pretendiera regular materias orgánicas constitucionales sería inconstitucional.

Como se ve, el respeto al ordenamiento jurídico, que es más complejo de lo que aquí se ha expuesto, requiere que los propios legisladores observen “religiosamente” los distintos niveles normativos al aprobar leyes, y si ellos mismos, en forma inadvertida o por alguna motivación política o ideológica, no lo hicieren, entonces un órgano competente, dentro del sistema legislativo, debe pronunciarse sobre la materia y evitar una transgresión que habría dañado nuestro ordenamiento así como los derechos que de él pueden derivarse sea para las personas o para el aparato público.

CONTROL JURÍDICO Y CONTROL POLÍTICO

En un Estado de derecho, el control de las leyes elaboradas por el Poder Legislativo (compuesto por ambas ramas del Congreso y por el Presidente de la República en su calidad de colegislador) no pueden contravenir normas de nivel superior, como se ha señalado. Especialmente, no pueden contravenir la Constitución Política de la República, para lo que se requiere de algún mecanismo de examen y control y además, que ese examen tenga fuerza obligatoria dentro del ordenamiento jurídico, es decir, que la proposición de una norma de rango legal contraria a la Constitución no pueda convertirse en ley.

Para este propósito, el control de constitucionalidad puede ejercerse, teóricamente, desde dos sistemas extremos y opuestos (si no se consideran mecanismos intermedios). Existe un control político de la constitucionalidad que es ejercido por el propio Poder Legislativo, de modo tal que si los

parlamentarios y el Presidente están de acuerdo (un acuerdo político) sobre tal o cual precepto calificado de constitucional, el referido precepto ha superado adecuadamente su examen y entrará a regir en la vida nacional, una vez promulgado y publicado.

Al otro extremo, está el control jurídico de la constitucionalidad de los proyectos de ley, en que no es el propio Congreso el que lo efectúa, sino un órgano “externo”, como es el Tribunal Constitucional. La normativa constitucional vigente se inclina por esta modalidad, mientras que la proposición que se analiza introduce modificaciones de fondo, que tienden, precisamente, a debilitar el control jurídico y dejarlo, preferentemente, en manos del propio Poder Legislativo.

La expresión más genuina de esta modalidad propuesta, es que la declaración de constitucionalidad de un proyecto de ley, efectuada por el Congreso con los quórum exigidos, primará sobre la opinión contraria que hubiere manifestado el Tribunal Constitucional ■■■

V. COMENTARIOS DE MÉRITO ESPECÍFICO

A continuación se comentan las proposiciones del proyecto, confrontadas sea con las normas vigentes, sea con los comentarios que mereciere cada proposición.

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY	TEXTO VIGENTE DE LA CONSTITUCIÓN O COMENTARIOS
<p>Artículo 92.- El Tribunal Constitucional es un órgano del Estado, autónomo e independiente de toda otra autoridad o poder.</p>	<p><i>El texto vigente no contiene una declaración similar a la propuesta; sin embargo, por su estructura jurídica y la organización del TC, nadie jamás ha dudado de su autonomía e independencia estructural (sin perjuicio de las opiniones críticas que ha merecido en mecanismo de designación de sus integrantes, como luego se verá).</i></p>
<p>El Tribunal Constitucional estará integrado por diez miembros, designados según el siguiente procedimiento:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) La Corte Suprema convocará a un concurso público para formar una terna que elevará al Presidente de la República. b) El Presidente de la República propone a uno de los integrantes de dicha terna a las dos Cámaras de Congreso Nacional. c) Cada una de las dos Cámaras, con el respaldo afirmativo de dos tercios de sus miembros en ejercicio, dan su conformidad al candidato. d) El Presidente de la República designa al elegido, nombrándolo como Ministro del tribunal Constitucional. 	<p><i>Actualmente también son diez los miembros del Tribunal, también elegidos con intervención del Presidente, el Congreso y la Corte Suprema, pero mediante un procedimiento totalmente diferente. La principal modificación, a favor del proyecto de reforma, es el concurso público que deberá convocar la Corte Suprema.</i></p> <p><i>Sin embargo, un aspecto que podría ser conveniente debatir, es si las votaciones a que da lugar este procedimiento, deberán o no ser secretas. Ambas posibilidades tienen sus aspectos positivos y negativos, en relación a las motivaciones (políticas, ideológicas etcétera) que pueden tener quienes emitan su sufragio.</i></p> <p><i>En general, el nuevo procedimiento propuesto no parece ser necesariamente mejor que el hoy día existente, pues en ambos casos tiene especial relevancia el poder político en la designación.</i></p>
<p>Para el cumplimiento de lo establecido en la letra c) anterior, y de forma previa a la votación,</p>	<p><i>Esta exigencia parece positiva.</i></p>

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY	TEXTO VIGENTE DE LA CONSTITUCIÓN O COMENTARIOS
<p>el candidato propuesto deberá formular una exposición de su postulación al cargo respectivo en una sesión especial y pública ante la Sala de la Cámara respectiva.</p>	
<p>Los miembros del Tribunal durarán nueve años en sus cargos y se renovarán por parcialidades cada tres. Deberán tener a lo menos quince años de título de abogado, estar en posesión del grado de doctor en ciencias jurídicas y haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública, no podrán tener impedimento alguno que los inhabilite para desempeñar el cargo de juez.</p>	<p><i>Lo novedoso en este inciso, es la exigencia del grado académico de doctor en ciencias jurídicas, lo que, igualmente, parece un requisito positivo y orientado a la mayor garantía de juridicidad en el control de constitucionalidad. Sin embargo, esta exigencia resulta contradictoria con la norma se ve transcribirá más adelante, según la cual, la última palabra en este materia la tendrá cada cámara del Congreso, mediante votación.</i></p>
<p>Los miembros del Tribunal Constitucional no podrán ser reelegidos, salvo aquel que lo haya sido como reemplazante y haya ejercido el cargo por un período menor a cinco años, y cesarán en sus funciones al cumplir 75 años. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal, por requerimiento del Presidente de la República o de los 2/3 de los miembros en ejercicio de cualquiera de las Cámaras, podrá declarar que los ministros no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes. Estos acuerdos se comunicarán al presidente de la República para su cumplimiento.</p>	<p><i>Un cambio de la mayor transcendencia se observa en este inciso: los miembros del TC podrán ser acusados por no haber tenido buen comportamiento, conducta cuyos contornos no están definidos en el proyecto de ley, violando ello el principio básico de derecho de establecer claramente cuál es la conducta prohibida, y de claro contenido subjetivo, que nuevamente se presta para problemas de índole políticos. El requerimiento podrá provenir ya sea del Presidente de la República o de un acuerdo por 2/3 de cualquiera de las cámaras. Pero la decisión será del propio Tribunal, suponemos que con prescindencia del ministro requerido, lo que no se señala expresamente. Esta situación es altamente compleja; si el Congreso tiene la posibilidad de promover una cuestión de este tipo, la independencia del TC queda en tela de juicio. Además la resolución del asunto por parte del TC, lo expone a una autoevaluación inconveniente desde muchos puntos de vista y a una situación muy compleja de cara a futuras resoluciones, induciendo comportamientos indeseados.</i></p>

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY	TEXTO VIGENTE DE LA CONSTITUCIÓN O COMENTARIOS
<p>En caso de que un miembro del Tribunal Constitucional cese en su cargo¹, se procederá a su reemplazo por quien corresponda, de acuerdo con el inciso primero de este artículo y por el tiempo que falte para completar el período del reemplazado.</p>	<p><i>Dentro del contexto del proyecto, este inciso es consistente con los demás preceptos que se proponen. No es esencialmente diverso de la norma vigente. En todo caso, debe entenderse que se trata de quienes cesen en el cargo antes de cumplir el período constitucional de nueve años.</i></p>
<p>Los miembros del Tribunal Constitucional serán responsables por el cohecho, la falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, la denegación y la torcida administración de justicia y, en general, toda prevaricación o grave infracción de cualquiera de los deberes que las leyes les impongan, quedando sujetos al castigo que corresponda según la naturaleza y gravedad del delito.</p>	<p><i>Este precepto es casi una copia del actual artículo 79 de la CPR: "Artículo 79.- Los jueces son personalmente responsables por los delitos de cohecho, falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, denegación y torcida administración de justicia y, en general, de toda prevaricación en que incurran en el desempeño de sus funciones.</i></p> <p><i>Tratándose de los miembros de la Corte Suprema, la ley determinará los casos y el modo de hacer efectiva esta responsabilidad".</i></p> <p><i>Esta norma tiene clara relación con la causal genérica de "mal comportamiento" que habilitaría para destituir a un miembro del TC. Ello podría incidir en la forma como un ministro hubiera fallado o emitido un voto disidente que fuera contrario al interés político de una parte del Congreso. En general, las razones para someter a los jueces a las responsabilidades que señala el artículo 79, recién transcrito, no se condicen, necesariamente, con las funciones del TC, que deberá pronunciarse precisamente sobre el "desempeño legislativo" de los miembros del Congreso Nacional y del Presidente de la República.</i></p>
<p>El Tribunal funcionará en pleno o dividido en dos salas. En el primer caso, el quórum para sesionar será de, a lo menos, ocho miembros y</p>	<p><i>Norma actual: artículo 92, inciso quinto:</i></p> <p><i>El Tribunal funcionará en pleno o dividido en dos salas. En el primer caso, el quórum para sesionar será de, a lo menos, ocho miembros y en el segundo de, a</i></p>

¹ Debe entenderse "antes del término de su período de 9 años o de su cesación por haber cumplido 75 años".

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY	TEXTO VIGENTE DE LA CONSTITUCIÓN O COMENTARIOS
<p>en el segundo de, a lo menos, cuatro. El Tribunal adoptará sus acuerdos por simple mayoría, salvo los casos en que se exija un quórum diferente y fallará de acuerdo a derecho. El Tribunal podrá funcionar en pleno o en sala de acuerdo a lo que disponga la ley orgánica constitucional respectiva.</p>	<p><i>lo menos, cuatro. El Tribunal adoptará sus acuerdos por simple mayoría, salvo los casos en que se exija un quórum diferente y fallará de acuerdo a derecho. El Tribunal en pleno resolverá en definitiva las atribuciones indicadas en los números 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 11° del artículo siguiente. Para el ejercicio de sus restantes atribuciones, podrá funcionar en pleno o en sala de acuerdo a lo que disponga la ley orgánica constitucional respectiva.</i></p> <p><i>Esta materia está desarrollada por la ley orgánica constitucional del TC (N°17.997), artículos 30 y siguientes.</i></p>
<p>Una ley orgánica constitucional determinará su organización, funcionamiento, procedimientos y fijará la planta, régimen de remuneraciones y estatuto de su personal.</p>	<p><i>Precepto idéntico a la norma vigente: inciso final del artículo 92 de la CPR:</i></p> <p><i>Una ley orgánica constitucional determinará su organización, funcionamiento, procedimientos y fijará la planta, régimen de remuneraciones y estatuto de su personal.</i></p>
<p>Artículo 93.- Son atribuciones del Tribunal Constitucional:</p> <p>1°.- Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación. <u>Este control tendrá lugar a requerimiento de cualquiera de las cámaras o de una cuarta parte de ellas, y procederá solo respecto de aquellos preceptos que hayan sido previamente calificados con el rango de orgánico constitucional, por ambas mesas del Congreso Nacional. La declaración de inconstitucionalidad de cualquiera de estas normas debe ser acordada por una mayoría de cuatro quintos de sus integrantes.</u></p>	<p><i>(Se subrayó lo nuevo).</i></p> <p><i>Esta modificación resume el corazón de la reforma propuesta, en cuanto circunscribe el control previo por parte del TC solo a los preceptos de ley orgánica constitucional así calificados por el Congreso Nacional; se entiende que esta calificación requiere el quórum de 4/7 de diputados y senadores en ejercicio, conforme al artículo 66 de la CPR.</i></p> <p><i>No podría, entonces, el TC pronunciarse sobre un precepto de un proyecto de ley no aprobado con quórum orgánico constitucional por ambas ramas del Congreso. Esta proposición es inconveniente en la medida que el Congreso podría aprobar leyes sobre materias orgánicas constitucionales sin el quórum respectivo, y sin que ello pudiera ser enmendado por el TC, lo que obliga a preguntarse sobre la conveniencia de que este Tribunal exista.</i></p>

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY	TEXTO VIGENTE DE LA CONSTITUCIÓN O COMENTARIOS
	<p>Además, se le impone al TC un quórum de 4/5 de sus integrantes para la declaración de inconstitucionalidad de un precepto orgánico constitucional previamente así calificado por el Congreso. Ello podría hacer inoperante la atribución.</p>
<p>Artículo 93.- Son atribuciones del Tribunal Constitucional:</p> <p>3°.- Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso;</p>	<p>(Se tarjó la parte que el proyecto elimina)</p> <p>La eliminación de los proyectos de reforma constitucional de la posibilidad de que se presenten requerimientos durante su tramitación, es una proposición inconveniente, pues forma parte actualmente de la competencia del TC, la tramitación del proyecto y especialmente, los quórum de aprobación. Si tales quórum no fueran respetados por cualquier razón, no habría ante quien pedir que se aplicara el principio de supremacía constitucional.</p> <p>Respecto de los tratados internacionales, la supresión podría generar un argumento para sostener que un tratado internacional contrario a nuestra CPR, la modifica automáticamente (tesis que ha tenido adeptos); sin embargo, desde un punto de vista de la tutela y conservación de la soberanía nacional, esa tesis resulta inadmisibles.</p> <p>Es indispensable, entonces mantener la actual competencia del TC en ambas materias.</p>
<p>El proyecto de reforma deroga la atribución del N°6 del artículo 93:</p> <p>6°.- Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución;</p>	<p>El recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, que existió desde antaño en nuestras constituciones, tiene su razón de ser en que una norma legal aparentemente concorde con la Constitución, sin embargo aplicada a algún caso concreto, podría resultar lesiva de algún derecho constitucional de cualquiera de las partes en un juicio seguido ante los tribunales de justicia.</p>

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY	TEXTO VIGENTE DE LA CONSTITUCIÓN O COMENTARIOS
	<p>Por ello no parece posible convenir en la derogación de esta facultad, que hasta el año 2005, la tenía la Corte Suprema. Ahora bien, nada obsta a que sea discutible la forma como se ha ejercido esta atribución y que se efectúe una comparación con la anterior jurisprudencia de la Corte Suprema. Lo que no puede hacerse es derogar esta atribución del Tribunal Constitucional y no devolverla a la Corte Suprema, lo cual, por la gravedad de sus consecuencias, parece ser una omisión involuntaria del texto más que una intención de los autores de la moción, toda vez que en sus fundamentos se propone radicar la inaplicabilidad en la Corte Suprema; pero ello no se puede producir automáticamente, sin normas expresas.</p>
<p>Nuevo inciso segundo del artículo 93: En el caso del número 1º, la Cámara de origen enviará al Tribunal Constitucional el proyecto respectivo dentro de los cinco días siguientes a aquél en que quede totalmente tramitado por el Congreso. <u>En el control preventivo previsto en el numeral 1º el Tribunal deberá tener especial deferencia con lo votado, dispuesto, o acordado por el legislador durante los trámites legislativos.</u></p>	<p>(Se subrayó la modificación que se propone).</p> <p>La recomendación que el proyecto de reforma le hace al TC, de ser deferente con lo resuelto por el Congreso, es impropia de un texto constitucional y constituye un desconocimiento de la separación de poderes entre los órganos del Estado, y de la verdadera deferencia que debe existir entre ellos.</p>
<p>Artículo 94.- Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno, sin perjuicio de que puede, el mismo Tribunal, conforme a la ley, rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido. <u>Con todo, la sentencia definitiva en los casos de los numerales 1 [control preventivo] y 3 [requerimiento por cuestión de constitucionalidad] del artículo anterior, deberá ser remitida a la Cámara de Origen la cual siempre podrá insistir en el texto aprobado por el congreso nacional, antes del envío al tribunal, por los dos tercios de sus miembros en ejercicio.</u></p>	<p>(Se subrayó la modificación propuesta).</p> <p>La proposición contenida es este nuevo artículo 94, inciso primero, significa volver en términos relevantes y eventualmente absolutos, al control político de la constitucionalidad de los proyectos de ley. Desde este punto de vista, cuesta entender que deba seguir existiendo el Tribunal Constitucional, al que la Constitución le asigna el control jurídico de la constitucionalidad de los proyectos de ley en trámite o aprobados por el Congreso Nacional.</p>

TEXTO DEL PROYECTO DE LEY	TEXTO VIGENTE DE LA CONSTITUCIÓN O COMENTARIOS
<p><u>Alcanzado dicho quórum pasará a la cámara revisora para su examen, y si el texto fuera aprobado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, se mantendrá definitivamente el texto aprobado por el congreso nacional antes de su envío al Tribunal y se enviará al ejecutivo para su promulgación y publicación o para los efectos previstos en el artículo 73 [veto del Presidente de la República].</u></p>	<p><i>Si una votación política, aunque sea por 2/3, resuelve que un precepto legal está conforme con la Constitución, de nada sirve el examen técnico jurídico efectuado por un órgano competente compuesto, como ahora se viene proponiendo, por doctores en derecho. Constituye una falta de consideración cercana al oprobio en contra de los miembros del Tribunal Constitucional, dejarlos subyugados a las mayorías políticas del Congreso Nacional, además de que, según otra parte del proyecto de reforma, podrían ser removidos por mal comportamiento.</i></p>

V. **TEXTO DEL** **PROYECTO DE LEY**

Artículo 1: En el Decreto Supremo N° 100 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de 22 de septiembre de 2005, reemplázase el actual artículo 92² por el siguiente artículo 92 nuevo del tenor que sigue:

Artículo 92.- El Tribunal Constitucional es un órgano del Estado, autónomo e independiente de toda otra autoridad o poder.

El Tribunal Constitucional estará integrado por diez miembros, designados según el siguiente procedimiento:

- a) La Corte Suprema convocará a un concurso público para formar una terna que elevará al Presidente de la República.
- b) El Presidente de la República propone a uno de los integrantes de dicha terna a las dos Cámaras de Congreso Nacional.
- c) Cada una de las dos Cámaras, con el respaldo afirmativo de dos tercios de sus miembros en ejercicio, dan su conformidad al candidato.
- d) El Presidente de la República designa al elegido, nombrándolo como Ministro del tribunal Constitucional.

2 Artículo 92 vigente:

Artículo 92.- Habrá un Tribunal Constitucional integrado por diez miembros, designados de la siguiente forma:

- a) Tres designados por el Presidente de la República.
- b) Cuatro elegidos por el Congreso Nacional. Dos serán nombrados directamente por el Senado y dos serán previamente propuestos por la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo por el Senado. Los nombramientos, o la propuesta en su caso, se efectuarán en votaciones únicas y requerirán para su aprobación del voto favorable de los dos tercios de los senadores o diputados en ejercicio, según corresponda.
- c) Tres elegidos por la Corte Suprema en una votación secreta que se celebrará en sesión especialmente convocada para tal efecto.

Los miembros del Tribunal durarán nueve años en sus cargos y se renovarán por parcialidades cada tres. Deberán tener a lo menos quince años de título de abogado, haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública, no podrán tener impedimento alguno que los inhabilite para desempeñar el cargo de juez, estarán sometidos a las normas de los artículos 58, 59 y 81, y no podrán ejercer la profesión de abogado, incluyendo la judicatura, ni cualquier acto de los establecidos en los incisos segundo y tercero del artículo 60

Los miembros del Tribunal Constitucional serán inamovibles y no podrán ser reelegidos, salvo aquel que lo haya sido como reemplazante y haya ejercido el cargo por un período menor a cinco años. Cesarán en sus funciones al cumplir 75 años de edad.

En caso que un miembro del Tribunal Constitucional cese en su cargo, se procederá a su reemplazo por quien corresponda, de acuerdo con el inciso primero de este artículo y por el tiempo que falte para completar el período del reemplazado.

El Tribunal funcionará en pleno o dividido en dos salas. En el primer caso, el quórum para sesionar será de, a lo menos, ocho miembros y en el segundo de, a lo menos, cuatro. El Tribunal adoptará sus acuerdos por simple mayoría, salvo los casos en que se exija un quórum diferente y fallará de acuerdo a derecho. El Tribunal en pleno resolverá en definitiva las atribuciones indicadas en los números 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9° y 11° del artículo siguiente. Para el ejercicio de sus restantes atribuciones, podrá funcionar en pleno o en sala de acuerdo a lo que disponga la ley orgánica constitucional respectiva.

Una ley orgánica constitucional determinará su organización, funcionamiento, procedimientos y fijará la planta, régimen de remuneraciones y estatuto de su personal.

Para el cumplimiento de lo establecido en la letra c) anterior, y de forma previa a la votación, el candidato propuesto deberá formular una exposición de su postulación al cargo respectivo en una sesión especial y pública ante la Sala de la Cámara respectiva.

Los miembros del Tribunal durarán nueve años en sus cargos y se renovarán por parcialidades cada tres. Deberán tener a lo menos quince años de título de abogado, estar en posesión del grado de doctor en ciencias jurídicas y haberse destacado en la actividad profesional, universitaria o pública, no podrán tener impedimento alguno que los inhabilite para desempeñar el cargo de juez.

Los miembros del Tribunal Constitucional no podrán ser reelegidos, salvo aquel que lo haya sido como reemplazante y haya ejercido el cargo por un período menor a cinco años, y cesarán en sus funciones al cumplir 75 años. Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal, por requerimiento del Presidente de la República o de los 2/3 de los miembros en ejercicio de cualquiera de las Cámaras, podrá declarar que los ministros no han tenido buen comportamiento y, previo informe del inculpado, acordar su remoción por la mayoría del total de sus componentes. Estos acuerdos se comunicarán al presidente de la República para su cumplimiento.

En caso de que un miembro del Tribunal Constitucional cese en su cargo³, se procederá a su reemplazo por quien corresponda, de acuerdo con el inciso primero de este artículo y por el tiempo que falte para completar el período del reemplazado.

Los miembros del Tribunal Constitucional serán responsables por el cohecho, la falta de observancia en materia sustancial de las leyes que reglan el procedimiento, la denegación y la torcida administración de justicia y, en general, toda prevaricación o grave infracción de cualquiera de los deberes que las leyes les impongan, quedando sujetos al castigo que corresponda según la naturaleza y gravedad del delito.

El Tribunal funcionará en pleno o dividido en dos salas. En el primer caso, el quórum para sesionar será de, a lo menos, ocho miembros y en el segundo de, a lo menos, cuatro. El Tribunal adoptará sus acuerdos por simple mayoría, salvo los casos en que se exija un quórum diferente y fallará de acuerdo a derecho. El Tribunal podrá funcionar en pleno o en sala de acuerdo a lo que disponga la ley orgánica constitucional respectiva.

Una ley orgánica constitucional determinará su organización, funcionamiento, procedimientos y fijará la planta, régimen de remuneraciones y estatuto de su personal.

3 Debe entenderse "antes del término de su período de 9 años o de su cesación por haber cumplido 75 años".

Artículo 2: En el Decreto Supremo N°100 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de 22 de septiembre de 2005, incorpóranse en el actual artículo 93⁴ las siguientes enmiendas:

- 1.- en el numeral 1 del inciso primero a continuación de la voz "promulgación" agrégase la frase antecedida de un punto seguido "Este control tendrá lugar a requerimiento de cualquiera de las cámaras o de una cuarta parte de ellas, y procederá solo respecto de aquellos preceptos que hayan sido previamente calificados con el rango de orgánico constitucional, por ambas mesas del Congreso Nacional. La declaración de inconstitucionalidad de cualquiera de estas normas debe ser acordada por una mayoría de cuatro quintos de sus integrantes."⁵.
- 2.- en el numeral 3 del inciso primero eliminase la frase "o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del congreso"⁶.
- 3.- Eliminase el numeral 6⁷ del inciso primero
- 4.- en el inciso segundo a continuación de la voz "Congreso" antecédase un punto seguido, agrégase la oración". En el control preventivo previsto en el numeral 1 el tribunal deberá tener especial deferencia con lo votado, dispuesto, o acordado por el legislador durante los trámites legislativos⁸.

4 Artículo 93 (encabezamiento):

Artículo 93.- Son atribuciones del Tribunal Constitucional:

5 El número 1° quedaría con la siguiente redacción:

1°.- Ejercer el control de constitucionalidad de las leyes que interpreten algún precepto de la Constitución, de las leyes orgánicas constitucionales y de las normas de un tratado que versen sobre materias propias de estas últimas, antes de su promulgación. Este control tendrá lugar a requerimiento de cualquiera de las cámaras o de una cuarta parte de ellas, y procederá solo respecto de aquellos preceptos que hayan sido previamente calificados con el rango de orgánico constitucional, por ambas mesas del Congreso Nacional. La declaración de inconstitucionalidad de cualquiera de estas normas debe ser acordada por una mayoría de cuatro quintos de sus integrantes.

6 El N°3° quedaría con la siguiente redacción:

3°.- Resolver las cuestiones sobre constitucionalidad que se susciten durante la tramitación de los proyectos de ley ~~o de reforma constitucional y de los tratados sometidos a la aprobación del Congreso;~~

7 N° 6°, que se deroga:

6°.- Resolver, por la mayoría de sus miembros en ejercicio, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en cualquier gestión que se siga ante un tribunal ordinario o especial, resulte contraria a la Constitución;

8 El inciso segundo quedaría con la siguiente redacción:

En el caso del número 1°, la Cámara de origen enviará al Tribunal Constitucional el proyecto respectivo dentro de los cinco días siguientes a aquél en que quede totalmente tramitado por el Congreso. En el control preventivo previsto en el numeral 1° el Tribunal deberá tener especial deferencia con lo votado, dispuesto, o acordado por el legislador durante los trámites legislativos.

Artículo 3: En el Decreto Supremo N°100 del Ministerio Secretaría General de la Presidencia de 22 de septiembre de 2005, incorporáranse las siguientes enmiendas al artículo 94 del tenor que siguen:

- 1.- en el inciso primero a continuación del punto a parte que pasa a ser punto seguido. Agrégase la siguiente oración "Con todo, la sentencia definitiva en los casos de los numerales 1 y 3 del artículo anterior, deberá ser remitida a la Cámara de Origen la cual siempre podrá insistir en el texto aprobado por el congreso nacional, antes del envío al tribunal, por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Alcanzado dicho quorum pasará a la cámara revisora para su examen, y si el texto fuera aprobado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, se mantendrá definitivamente el texto aprobado por el congreso nacional antes de su envío al Tribunal y se enviará al ejecutivo para su promulgación y publicación o para los efectos previstos en el artículo 73⁹.¹⁰.



9 Artículo 73.- Si el Presidente de la República desapueba el proyecto, lo devolverá a la Cámara de su origen con las observaciones convenientes, dentro del término de treinta días.

En ningún caso se admitirán las observaciones que no tengan relación directa con las ideas matrices o fundamentales del proyecto, a menos que hubieran sido consideradas en el mensaje respectivo.

Si las dos Cámaras aprobaran las observaciones, el proyecto tendrá fuerza de ley y se devolverá al Presidente para su promulgación.

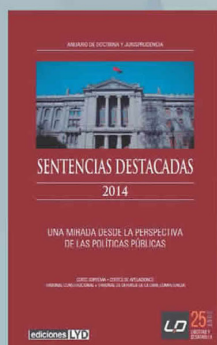
Si las dos Cámaras desecharen todas o algunas de las observaciones e insistieren por los dos tercios de sus miembros presentes en la totalidad o parte del proyecto aprobado por ellas, se devolverá al Presidente para su promulgación.

10 El inciso primero del artículo 94 quedaría con la siguiente redacción:

Artículo 94.- Contra las resoluciones del Tribunal Constitucional no procederá recurso alguno, sin perjuicio de que puede, el mismo Tribunal, conforme a la ley, rectificar los errores de hecho en que hubiere incurrido. Con todo, la sentencia definitiva en los casos de los numerales 1 y 3 del artículo anterior, deberá ser remitida a la Cámara de Origen la cual siempre podrá insistir en el texto aprobado por el congreso nacional, antes del envío al tribunal, por los dos tercios de sus miembros en ejercicio. Alcanzado dicho quorum pasará a la cámara revisora para su examen, y si el texto fuera aprobado por los dos tercios de sus miembros en ejercicio, se mantendrá definitivamente el texto aprobado por el congreso nacional antes de su envío al Tribunal y se enviará al ejecutivo para su promulgación y publicación o para los efectos previstos en el artículo 73.

ÚLTIMAS PUBLICACIONES

VENTA ONLINE EN WWW.LYD.ORG



Sentencias Destacadas
2014 (2015),
Varios autores

"El paciente se pone
impaciente" (2014)
Mikel Uriarte P.

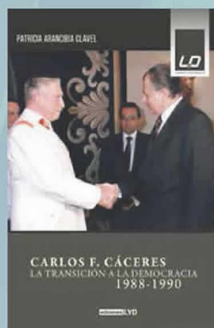


Migraciones en Chile:
Oportunidad Ignorada
(2014) Álvaro Bellolio A.,
Hernán Felipe
Errázuriz C.

Sentencias Destacadas
2013 (2014),
Varios autores



Pensiones:
Propuestas para el
Futuro (2015)
Varios autores



La transición a la
democracia 1988-1990.
(2014)
Carlos F. Cáceres.

Activismo judicial en Chile
¿Hacia el gobierno de los
jueces? (2013)
José Francisco García y
Santiago Verdugo



LYD ES
REPRESENTANTE
EXCLUSIVO EN CHILE
DE LIBROS UNIÓN
EDITORIAL DE ESPAÑA.

**NO SE PIERDA
ADEMÁS LAS
NOVEDADES EN
EL CATÁLOGO DE
LIBROS DE UNIÓN
EDITORIAL.**



LIBERTAD Y DESARROLLO
ALCÁNTARA 498, LAS CONDES
SANTIAGO DE CHILE

www.lyd.org / lyd@lyd.org

